

Iquique, nueve de marzo de dos mil veintitrés.

VISTO:

En estos autos RUC N° 21-4-0339881-8, RIT T-111-2021, la Jueza del Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique, doña Marcela Díaz Méndez, dictó sentencia el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, ocasión en que acogió una demanda por tutela de derechos fundamentales e indemnización de perjuicios por daño moral, deducida por doña Erika Castillo Flores, contra la Universidad Arturo Prat, representada por don Alberto Martínez Quezada.

El abogado Sr. Eduardo Cáceres Aliste, en representación de la demandada, entabló recurso de nulidad alegando las causales contempladas en las letras e) y b) del artículo 478 del Código del Trabajo, y en el artículo 477 del mismo cuerpo legal.

A la audiencia de rigor, concurrió por la recurrente el abogado Sr. Cáceres, mientras que por la recurrida lo hizo la abogada Sra. María José Sarmiento Etcheverry.

OÍDO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso deducido se funda, en primer lugar, en la causal establecida en la letra e) del artículo 478 del Código del ramo, esto es, cuando la sentencia contuviese decisiones contradictorias.

En esa dirección, la recurrente señala que en los razonamientos y decisiones contenidas en los motivos 11 al 14 del fallo impugnado, como en la parte resolutive del mismo, se aprecian una serie de



incongruencias que detalla en cinco situaciones, las que a continuación se exponen de manera resumida.

De este modo, cita como primera contradicción, que en el motivo undécimo la juzgadora señaló que el cargo de la actora era de “confianza”, no obstante más adelante concluyó que ésta resultó afectada por la incertidumbre laboral que generó el proceso de reorganización de la demandada, fundamento que utilizó para acoger la acción interpuesta basándose para ello en el artículo 2 del Código del Trabajo.

Agrega, como segunda contradicción, que en el mismo motivo la sentenciadora afirmó que las respuestas a los correos electrónicos que la trabajadora envió a su empleador, fueron evacuadas en forma oportuna y debidamente fundada, descartando que la incertidumbre que alega sobre su suerte profesional se compadezca con la figura del acoso u hostigamiento laboral, no obstante lo cual, más adelante afirmó que dicha circunstancia sí medió en su relación con la demandada y la utilizó como basamento de su condena.

Sostiene, como tercer capítulo, que la juzgadora señaló que la demandante parecía confundir la mentada incertidumbre de su situación laboral, con un supuesto abuso de poder por parte de la dirección de la institución, lo que no era efectivo, desde que el empleador siempre respetó sus derechos, sin embargo posteriormente concluyó de la manera antedicha, misma situación que ocurrió en una cuarta inconsistencia, consistente en que la sentenciadora sostuvo que la actora no reclamó de la reestructuración



de la Universidad, porque conocía y compartía el proceso, el que definió como lento por sus propias características, sin perjuicio de lo cual el fallo termina por concluir del modo indicado precedentemente.

Alude, por último, a una quinta contradicción, indicando que sin perjuicio que en todo momento se descartó la existencia de actos de hostigamiento por parte de la demandada, el fallo justifica y declara en su parte resolutive, la existencia de una vulneración al derecho fundamental a la integridad síquica de la actora, ordenando pagar una indemnización por daño moral en base al artículo 2 del Código del Trabajo, el cual precisamente sanciona el acoso laboral y la discriminación que la misma juzgadora desestimó.

Indica que el vicio influyó sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia, en la medida en que si ésta hubiere conservado sus primeros razonamientos sobre la ausencia y no acreditación de los hechos denunciados por la demandante, debió rechazar totalmente la denuncia de tutela, añadiendo que el fallo lo perjudica económica y administrativamente, esto último porque la remisión de la sentencia a la Dirección del Trabajo para su registro, conlleva una sanción automática de prohibición de contratación, establecida en el artículo 4 de la Ley N° 19.886, sobre Base de Contratos de Suministros y Servicios por este Órgano del Estado, por 2 años, con el propio Estado de Chile, por lo que solicita se anule la presente sentencia y en su lugar se dicte otra de reemplazo, que disponga el rechazo de la denuncia interpuesta.



SEGUNDO: En subsidio, alega la causal de nulidad establecida en la letra b) del artículo 478 del estatuto Laboral, esto es, cuando la sentencia ha sido pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, específicamente el principio de la lógica, en relación a la correspondencia que debe existir entre el razonamiento, la ponderación de la prueba y las conclusiones arribadas por el juzgador.

Explica que el Tribunal no estableció como punto de prueba la acreditación de un daño emocional que constituya vulneración a los derechos fundamentales de la trabajadora, o los perjuicio derivados del daño en referencia, sino sólo “existencia de acoso laboral y vulneración de derechos fundamentales, y perjuicios sufridos por la actora con ocasión de los hechos denunciados y monto de los mismos”.

Examina largamente los medios de prueba aportados al efecto concluyendo, en síntesis, que el informe de la psicóloga Elsa Vera Toscanini, solo indicaba “haber brindado atención psicoterapéutica a la denunciante, presentando ésta un trastorno de adaptación (a secas), que tiene relación principalmente con determinados cambios, con respecto al cargo que ella desempeñaba y en cuanto al pago de dinero que ella recibía” (sic); que la única licencia médica que presentó la actora, entre los años 2020 y 2021, fue sólo por 15 días y por enfermedad común; y que el perito Alexander Palma, indicó que la mayor experticia que tenía era en evaluaciones periciales de víctimas de delitos violentos, que en su peritaje no entrevistó a las jefaturas de



la denunciada, no visitó el lugar de trabajo de la denunciante, ni tampoco verificó sus tareas, añadiendo que su labor se basó solo en la anamnesis de la trabajadora y que el objetivo del mismo no era indagar sobre la existencia de un acoso laboral, sino en pesquisar eventuales consecuencias psicológicas y posible daño en la peritada, circunstancias todas que en definitiva no fueron consideradas, ni debidamente ponderadas, por la sentenciadora en su análisis de la prueba rendida en juicio, y que impiden concluir del modo indicado en el fallo, bajo sanción de infringir lo dispuesto en el artículo 456 del Código del ramo.

Añade que de la propia declaración de la demandante y de los testigos Ramos, Espinoza y Bugueño, más la documental que indica, emana que no es posible concebir la existencia de un daño emocional en la accionante, ya que ésta entregó su cargo el 12 de abril de 2021 y la acción de tutela se presentó el 8 de junio de ese mismo año.

Afirma que el vicio influyó sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia, pues si ésta hubiere respetado las reglas reguladoras de la prueba, no debió tener por acreditada la existencia del daño emocional que sostiene, reiterando que el fallo lo perjudica económica y administrativamente por las razones anotadas más arriba, por lo que solicita se anule la presente sentencia y en su lugar se dicte otra de reemplazo, que disponga el rechazo de la demanda interpuesta.

TERCERO: En subsidio de las causales anteriores, invocó la establecida en la segunda parte del artículo 477 del Código del Trabajo, consistente en haberse dictado la sentencia con infracción de



ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, específicamente por falsa aplicación de los artículos 2 y 485 del mencionado cuerpo legal.

Explica, en síntesis, que habiéndose establecido en la sentencia la inexistencia de acoso laboral; que el cargo de la actora era de confianza; que el cese del cargo de jefatura conllevaba una merma remuneracional; que la trabajadora no reclamó del cambio de puesto; que aceptó el proceso de restructuración de la demandada; que no le fue negado el feriado correspondiente; que no se le insistió a firmar una fianza y que presentó sólo una licencia médica entre los años 2020 y 2021, por enfermedad común, no resultaba posible aplicar los señalados artículos, en la medida que sancionan el acoso u hostigamiento laboral y el empleo de facultades del empleador de manera injustificada, arbitraria, desproporcionada o sin respeto a su contenido esencial, circunstancias que en definitiva no ocurrieron.

Indica que el vicio influyó sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia, pues si se hubiere fallado conforme al real sentido y alcance de las normas citadas, y en definitiva no se hubieran aplicado al caso de la especie, debió rechazarse la demanda intentada, reiterando las perjudiciales consecuencias del presente fallo anotadas más arriba y lo peticionado a este Tribunal.

CUARTO: Que, previo a resolver sobre las distintas causales de nulidad esgrimidas por la recurrente, resulta útil señalar que en el motivo undécimo del fallo impugnado, el Tribunal consignó una serie de conclusiones, a partir del análisis de la prueba rendida en juicio,



que zanjaron de manera clara y precisa los aspectos medulares de lo discutido por las partes, las que conviene tener presente previo a examinar los vicios acusados en la sentencia, que acogió la demanda por tutela de derechos fundamentales entablada por la trabajadora Sra. Erika Castillo Flores.

Ciertamente, consta en dicho fundamento que el cargo que detentaba la actora en la institución demanda, esto es, la Universidad Arturo Prat, era de aquellos denominados de confianza, cuestión que llevó a la sentenciadora a concluir que aquella no podía menos que saber, desde que fue designada en él, que podía perder su posición de jefatura, en razón de las especiales características de su investidura.

Consta, también, que las respuestas a los múltiples correos electrónicos enviados por ella a la demandada, para solicitar información sobre su situación laboral en relación a la marcha del proceso de reestructuración organizacional, fueron evacuadas de manera oportuna y fundada, añadiendo la falladora que en consecuencia la incertidumbre que alegaba la actora respecto de si seguiría detentando un cargo de jefatura y sus condiciones, en caso alguno se compadecía con un hostigamiento laboral, máxime si fundaba sus alegaciones solo en rumores de que no seguiría, los que no fueron acreditados en juicio.

Emana del mismo fundamento, además, que en el aludido proceso de reestructuración, la demandada respetó siempre los derechos de la trabajadora y mantuvo una fluida comunicación con



ella, puntualizando la juzgadora incluso que la actora parecía confundir la incertidumbre de su situación laboral, con un supuesto abuso de poder por parte de la dirección de la institución, por no adoptar, adoptar tardíamente o negligentemente, ciertas decisiones, lo que a reglón seguido descartó dadas las especiales circunstancias que se vienen comentando.

A continuación, el mismo fundamento, desecha la discriminación que la accionante sostiene en base a su sobrecalificación para el cargo al que fue asignada, desde que no probó un trato diferente al resto de los funcionarios que se vieron envueltos en el mismo proceso de reorganización, citando incluso sus propias palabras en el sentido que no reclamó de la mentada restructuración porque conocía, compartía y aprobaba el proceso, entendiendo que traspasar su cargo a un nuevo jefe implicaba la confección de perfiles, claves y otras acciones, cuestión que asumía como una tarea de lenta ejecución.

Que, sobre la base de las razones expuestas, la sentenciadora concluyó que no existió en la especie acoso, hostigamiento o discriminación laboral alguna, como también que el empleador actuó con pleno respeto a los derechos de la actora en el contexto de la reorganización o reestructuración de la institución, subrayando que la propia demandante declaró en juicio que se encontraba de acuerdo y compartía dicha gestión, asumiendo que se trataba de un proceso larvado.

QUINTO: Que, así las cosas, no obstante haber concluido el fallo analizado, en base a todas las razones anteriores, que no se



configuraba en los hechos el instituto del acoso laboral y que la demandada respetó siempre los derechos de la trabajadora en el marco de sus cambios y mejoras internas, la sentenciadora de todas formas acogió la demanda por vulneración a la integridad síquica de la actora, conclusión que no resiste un análisis lógico, en la medida en que el resultado a que arriba no se condice con la debida y necesaria derivación y coherencia de sus propios planteamientos, lo que redundaría en un fallo contrario a las normas sobre apreciación de la prueba, conforme a las reglas de la sana crítica, que en definitiva no permite justificar satisfactoriamente la decisión adoptada.

SEXTO: En efecto, sin perjuicio que el propio Tribunal concluye que no se constituyen las figuras en comento, la sentenciadora decide reconocer la procedencia de una afectación síquica en la persona de la actora, fundada en la incertidumbre que padeció durante el desarrollo del proceso de reestructuración y reorganización de la empleadora, explicando en este punto que el impacto emocional, la merma salarial y el desconocimiento del nuevo puesto que ocuparía en la institución, se tradujo en el incumplimiento de la obligación de la demandada de velar por el cuidado de la vida y salud de aquella, conclusiones que basó en los dichos de la propia demandante, el testigo Sr. Bugueño, una licencia médica y la opinión del perito psicólogo Sr. Palma.

SÉPTIMO: Que, en esa línea, la incongruencia entre su razonamiento y su decisión resulta palmaria, desde que la incertidumbre a que alude como base de la vulneración a la integridad



síquica de la actora, había sido previamente descartada al concluir que su cargo era de aquellos denominados de confianza, que siempre se le mantuvo informada del proceso de reorganización de la contraria, y que la propia trabajadora aprobaba y aceptaba la mentada restructuración, asumiendo que era un proceso lento, conclusiones que además deben vincularse a las consignadas en el motivo duodécimo, cuando al hacerse cargo del daño moral alegado no sólo reitera las características del puesto que ocupaba la demandante, sino que agrega que sus competencias no fueron acreditadas en juicio, que sus conocimientos eran apropiados para el cargo que actualmente desempeñaba y que el cambio no afectó su patrimonio, en la medida en que las asignaciones de las que se le privó estaban directamente vinculadas al cargo que antes detentaba.

OCTAVO: Que, a mayor abundamiento, el análisis de la evidencia citada como sustento para su decisión, no permite concluir a ciencia cierta que la actividad atribuida a la demandada sea realmente constitutiva de la vulneración estatuida en el artículo 485 del Código del ramo.

Ello, por cuanto la única prueba objetiva citada por la sentenciadora para ese efecto, más allá de la personal percepción de la actora y su cónyuge sobre una situación tan particular como el proceso de cambio en que se vio envuelta, consistieron en una licencia médica y el informe del perito psicólogo Sr. Palma, antecedentes que en definitiva no aportaron insumos suficientes para ello, en la medida en que tal como señaló la recurrente, la aludida



licencia fue emitida sólo por un término de 15 días, por enfermedad común, y además, por una profesional del área de la medicina general (Dra. Carolina Jiménez Chureo), mientras que el perito informante, cuyo trabajo se enfocaba en determinar o descartar la presencia de daño emocional en la peritada, no entrevistó a las jefaturas de la denunciada, no visitó el lugar de trabajo de la denunciante, ni tampoco verificó sus tareas, como suele suceder en los peritajes de los órganos administradores de salud para pesquisar estos asuntos, limitándose a realizar su trabajo sobre la base de los antecedentes incorporados en la carpeta virtual de la presente causa, tales como un informe psicológico anterior y la licencia médica ya aludida, cuestión que resta fuerza a sus conclusiones, las que dan cuenta más bien en una aprehensión subjetiva de la actora sobre las circunstancias vivenciadas que de la existencia de un acto objetivamente lesivo de parte de la demandada, todo ello sin perjuicio de la reconocida dificultad forense que representa vincular la sintomatología aludida a una situación vital específica y determinada.

NOVENO: En consecuencia, el razonamiento de la sentenciadora para concluir que la demandada es responsable, de todas maneras, de vulnerar el derecho fundamental a la integridad síquica de la actora por la incertidumbre de su situación laboral, en el contexto de su reestructuración institucional, resulta a todas luces extraño e improcedente, pues tanto el acoso laboral como la infracción de derechos levantadas por la demandante fueron descartadas por la propia juzgadora, a la vez que las piezas probatorias en las que



posteriormente se basó para sustentarlo, no parecen suficientes para arribar a esa conclusión.

DÉCIMO: De este modo, la decisión del Tribunal infringe los principio de la lógica, específicamente los de derivación, coherencia y razón suficiente, desde que por un lado se aparta de los hechos y conclusiones establecidos precedentemente por el mismo, apareciendo su resolución, entonces, como inconsistente con el razonamiento que le antecede, y por otro lado, la evidencia en que fundamenta sus conclusiones, no permite sustentar razonablemente el resultado que alcanza, todo lo cual redundando en el vicio de nulidad contemplado en el artículo 478 letra b) del Código del ramo.

UNDÉCIMO: En consecuencia, se acogerá el recurso de nulidad intentado por la causal señalada, de manera que no se emitirá pronunciamiento respecto del resto, por resultar innecesario.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 474 y siguientes del Código del Trabajo, **SE ACOGE** el recurso de nulidad interpuesto por la demandada, Universidad Arturo Prat, en contra de la sentencia de 25 de noviembre de 2022, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique, la que se invalida, procediéndose a dictar separadamente y sin nueva vista, la respectiva sentencia de reemplazo.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Redacción del Ministro señor Andrés Provoste Valenzuela

Rol N° 146-2022 Laboral Cobranza.



Monica Adriana Olivares Ojeda
MINISTRO
Fecha: 09/03/2023 10:25:27

Pedro Nemesio Guiza Gutierrez
MINISTRO
Fecha: 09/03/2023 11:01:15

Andres Alejandro Provoste Valenzuela
MINISTRO
Fecha: 09/03/2023 10:28:38



Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Iquique integrada por los Ministros Titulares sra. Mónica Olivares Ojeda, sr. Pedro Güiza Gutiérrez y sr. Andrés Provoste Valenzuela. Iquique, nueve de marzo de dos mil veintitrés.

En Iquique, a nueve de marzo de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.
A contar del 11 de Septiembre de 2022, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>.

SENTENCIA DE REEMPLAZO

Iquique, nueve de marzo de dos mil veintitrés.

VISTO:

Se reproduce la parte expositiva, así como también los motivos primero al undécimo de la sentencia anulada, salvo en este último desde el punto seguido del párrafo undécimo hasta el final de ese fundamento, el párrafo final del motivo décimo tercero, y el motivo décimo cuarto, que se eliminan, manteniéndose los motivos cuarto y siguientes del fallo que antecede.

Y TENIENDO, ADEMÁS, PRESENTE:

PRIMERO: Que, en base a los antecedentes analizados, no resulta posible concluir que la conducta de la demandada, Universidad Arturo Prat, se encuadre en el instituto del acoso laboral, desde que en el contexto de su proceso de reestructuración interna, no ha procedido a agredir u hostigar, menos aún de manera reiterada, a la demandante Sra. Erika Castillo Flores, ni le ha causado, por lo mismo, menoscabo, maltrato, o humillación en su condición de trabajadora, como tampoco ha amenazado o perjudicado su situación laboral u oportunidades de empleo.

Del mismo modo, la prueba vertida en juicio no ha permitido concluir que la accionada haya vulnerado los derechos y garantías fundamentales de la actora, en la medida en que su actuación ha sido legítima y ajustada a derecho, no afectando de este modo el ejercicio, ni el contenido esencial de aquellos.



SEGUNDO: En ese contexto, entonces, no se divisa en la especie la infracción endilgada por la actora al ente empleador, en cuanto incurrir en alguna de las actividades descritas en los artículos 2 y 485 del Código del ramo, como tampoco el incumplimiento al deber de cuidado de la vida y salud de la trabajadora, establecido en el artículo 184 del mismo cuerpo legal, razones por las cuales se rechazará la demanda intentada y se desestimarán las pretensiones de la actora.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 2, 184, 485, 420, 425, 446 y siguientes del Código del Trabajo, se resuelve:

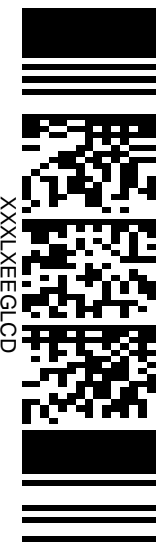
I.- **SE RECHAZA** en todas sus partes la demanda entablada por doña Erika Castillo Flores, contra Universidad Arturo Prat, representada por don Alberto Martínez Quezada, ambos domiciliados en Avda. Arturo Prat N°2120, Iquique.

II.- Que no se condena en costas a la demandante, por existir motivo plausible para litigar.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Redacción del Ministro señor Andrés Provoste Valenzuela

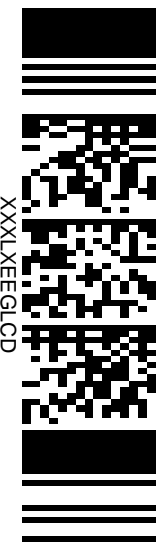
Rol N° 146-2022 Laboral Cobranza.



Monica Adriana Olivares Ojeda
MINISTRO
Fecha: 09/03/2023 10:25:29

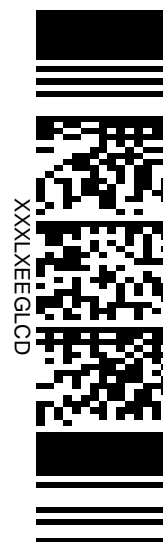
Pedro Nemesio Guiza Gutierrez
MINISTRO
Fecha: 09/03/2023 11:01:18

Andres Alejandro Provoste Valenzuela
MINISTRO
Fecha: 09/03/2023 10:28:41



Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Iquique integrada por los Ministros Titulares sra. Mónica Olivares Ojeda, sr. Pedro Güiza Gutiérrez y sr. Andrés Provoste Valenzuela. Iquique, nueve de marzo de dos mil veintitrés.

En Iquique, a nueve de marzo de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.
A contar del 11 de Septiembre de 2022, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>.